

MIGRACIÓN DE MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO

PRÓLOGO

JOSÉ LUIS CALVA*

En 1980, cuando comenzaba la era de la globalización neoliberal, vivían fuera del país en que nacieron 102 millones de personas en el mundo, que representaban el 2.3% de la población mundial (Organización Mundial para las Migraciones, *Informe sobre las migraciones en el mundo 2018*). En 2017, según las más recientes cifras de la División de Población de la ONU (Workbook: Un_MigrantsStockByOrigenAndDestination_2017, consultado el 10/02/2019), el número de personas que vivían fuera del país en que nacieron ascendió a 257.7 millones, el 3.4% de la población mundial.

De acuerdo con las mismas fuentes, en 1980 vivían fuera de nuestro país 2.2 millones de personas nacidas en México, que representaban el 3.1% de la población residente en México. En 2017, el número de mexicanos que vivían fuera de las fronteras nacionales ascendió a 12.9 millones, el 10.97% de la población residente en México. Su destino principal fueron los Estados Unidos, donde en 2017 residían 12.7 millones de personas nacidas en México, el 10.7% de la población residente en nuestro país. Es, ciertamente, un éxodo humano de dimensiones catastróficas.

¿Por qué ocurrió este éxodo? La parte nacional de la respuesta puede resumirse en las palabras de Teresa García, migrante mexicana en Estados Unidos, entrevistada en 2019 por David Brooks: “Estamos aquí porque fuimos expulsados por las políticas neoliberales de México” (*La Jornada*, 11/02/2019). Ciertamente, desde el arribo de la tecnocracia neoliberal al gobierno de México, con Miguel de la Madrid como presidente, la economía nacional ha sido incapaz de generar suficientes empleos remunerados para las nuevas generaciones de jóvenes demandantes de empleo. Durante el sexenio 1983-1988 —de acuerdo con las cifras del *Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 1980*—, en el conjunto de la economía mexicana sólo se generaron

* Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

509 mil nuevos empleos remunerados, o sea 85 mil empleos por año a causa del casi nulo crecimiento económico. Pero durante ese lapso cada año se requerían casi un millón de nuevos puestos de trabajo para los jóvenes demandantes de empleo, de manera que 5.3 millones de ellos no encontraron empleos remunerados en nuestro país. Durante el período 1989-2004 —de acuerdo con las cifras del *Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 1993*— sólo se generaron 8.1 millones de nuevos empleos remunerados, o sea 507 mil empleos por año; pero cada año se requerían poco más de 1.2 millones de nuevos puestos de trabajo para los jóvenes, de manera que otros 11.2 millones de jóvenes no encontraron ocupaciones remuneradas en nuestro país. Finalmente, de acuerdo con el *Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 2013*, durante el período 2004-2017 se crearon 6.2 millones de nuevos empleos remunerados, o sea 478 mil por año; pero cada año se requerían poco menos de 1.4 millones de nuevos puestos de trabajo remunerados para los jóvenes, de modo que otros 11.8 millones de jóvenes no encontraron empleos remunerados en nuestro país.

La razón es sencilla: para que México hubiera creado suficientes puestos de trabajo remunerados para sus nuevos demandantes de empleo, el producto interno bruto debió haber crecido a una tasa cercana al 6% anual. Pero durante los seis sexenios cumplidos de experimentación neoliberal (1983-2018), el PIB apenas creció a una tasa media del 2.3% anual, de manera que los empleos remunerados que se generaron resultaron insuficientes para dar ocupación a las nuevas generaciones. Desde luego, el decepcionante desempeño económico no cayó del cielo: fue resultado natural de la estrategia económica neoliberal perseverantemente aplicada en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Por una parte, las “reformas estructurales” apegadas a las prescripciones neoliberales del Consenso de Washington (la apertura comercial unilateral, abrupta e indiscriminada, combinada con el achicamiento de las políticas activas de fomento económico general y sectorial, y con la liberalización de la inversión extranjera y del sistema financiero), provocaron la pérdida de eslabones completos de las cadenas productivas, destruidos por el crecimiento vertiginoso del componente importado; *eo ipso*, generaron una creciente desvinculación entre la economía de mercado interno y un sector exportador que, lejos de ejercer un efecto de arrastre sobre la planta productiva mexicana, transmite sus efectos multiplicadores sobre la producción, la inversión y el empleo fuera del país, tendiendo a convertirse en industria *cuasi* maquiladora (o, lo que es lo mismo, en una *economía de enclave*); profundizaron la brecha tecnológica y de productividad entre los distintos sectores y ramas de la economía mexicana, trayendo consigo una escasa generación de empleos en el sector formal de la economía y un creciente *desempleo encubierto* en el sector informal de la

economía (de baja tecnología y productividad), así como un ensanchamiento de las desigualdades en el desarrollo regional y en la distribución factorial del ingreso, con una dramática proliferación de la pobreza. Por otra parte, la ortodoxia macroeconómica neoliberal aplicada en México, que erige el control de la inflación y el cumplimiento de las metas de balance fiscal en objetivos prioritarios a ultranza, ha mutilado el papel contracíclico de las políticas fiscal y monetaria (id est, aumentar el gasto público y abaratar el crédito para estimular la actividad económica cuando ésta cae en recesión o se enfila hacia ella), trayendo consigo los repetidos *ciclos de freno y arranque* de la economía mexicana, al tiempo que la utilización de la política cambiaria como instrumento antiinflacionario ha traído consigo el pesado fardo de la casi crónica sobrevaluación del peso mexicano, con efectos adversos sobre la competitividad de los productores nacionales frente a sus competidores extranjeros (véase el volumen 4 de esta colección). Como resultado agregado se ha observado una elevada subutilización promedio de la capacidad productiva instalada, incidiendo negativamente sobre las utilidades empresariales, la productividad de los factores y el crecimiento de la inversión productiva, con las consiguientes bajas tasas medias de crecimiento del PIB y del empleo remunerado.

Dado el decepcionante desempeño de la economía mexicana durante el periodo de operación de la estrategia neoliberal, la emigración de trabajadores al extranjero ha sido, ciertamente, una válvula de escape a las presiones sobre el mercado de trabajo nacional. De hecho, durante el periodo 1983-2018 solamente se crearon cerca de 15 millones de empleos formales (14 millones de los cuales fueron registrados en el IMSS y el ISSSTE), es decir alrededor de la tercera parte de los empleos formales que debieron haberse creado para satisfacer los requerimientos de empleo digno de las nuevas generaciones. Como contraparte —de acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2018— 32 millones de mexicanos, que representan el 56.8% de la población económicamente activa, se ubican en el empleo informal, caracterizado por su precariedad, sus bajas retribuciones y su carencia de prestaciones de seguridad social. Además, se ha desarrollado un enorme segmento poblacional en el desempleo encubierto: 5.7 millones de mexicanos que “no buscan empleo porque no tienen esperanza de conseguirlo, pero se declaran en disponibilidad de trabajar” (INEGI), sin contar a los 2.5 millones de mexicanos que se ubican en el desempleo abierto porque buscan activamente trabajo pero no lo encuentran.

En estas condiciones, es cierto que las remesas de los migrantes hacia sus familias en México han contribuido a paliar la pobreza resultante de la estrategia económica neoliberal. Y, ciertamente, el crecimiento de las reme-

sa ha sido tan espectacular como el crecimiento de la exportación de mano de obra: los recursos enviados a nuestro país por los trabajadores mexicanos emigrados al extranjero (principalmente a Estados Unidos) saltaron de 1 043 millones de dólares (MDD) en 1982, a 26 049.6 MDD en 2007, para decrecer a 21 306.3 MDD en 2009 a causa de la Gran recesión, mantenerse cerca de ese nivel hasta 2013 y ascender después paulatinamente hasta 33 480.55 MDD en 2018, de acuerdo con las cifras del Banco de México.

Sin embargo, aunque las remesas aparecen en el *haber* de la balanza de pagos, la exportación de trabajadores debe cargarse al *debe* de la estrategia económica neoliberal, puesto que reflejan su incapacidad para generar suficientes empleos. Hay que remarcarlo: el prodigioso crecimiento de la exportación de mano de obra y el decepcionante desempeño de la economía bajo el modelo neoliberal, son dos caras de la misma moneda. No es sólo el caso de México: en un estudio de dimensiones internacionales, el staff del Fondo Monetario Internacional reconoció hace más de una década que “las remesas guardan una correlación negativa con el crecimiento del PIB”. En la práctica, “las remesas tienden a compensar a sus receptores por las malas condiciones económicas” (R. Chami *et al.*, “Are Immigrant Remittance Flows a Source of Capital for Development?”, *IMF Staff Papers*, vol. 52, núm. I, 2005).

Este vínculo negativo entre remesas y crecimiento económico ha sido confirmado por diversos estudios. Una investigación reciente realizada por Ralph Chami, Ekkehard Ernst, Connel Fullenkamp y Anne Oeking, que comprendió “análisis transnacionales de países que reciben diferentes cantidades de remesas [como Egipto, México y Pakistán] y de países que envían remesas en lugar de recibirlas”, apoyándose en distintos estudios académicos, se dio a la búsqueda de “una explicación congruente de cómo y por qué las economías que reciben remesas considerables pueden estancarse en un bajo nivel de crecimiento”. Dado que “las remesas se gastan principalmente en consumo de los hogares, y que la demanda de todos los productos (transables o no) de una economía aumenta a medida que las remesas crecen”, observan los autores, “esto ejerce una presión al alza sobre los precios. La avalancha de divisas, junto con mayores precios, hace que las exportaciones sean menos competitivas, lo que da origen a una caída en la producción. Hay quienes denominan esto el mal holandés” (Chemi, Ralph *et al.*, “¿Son una trampa las remesas?”, *Finanzas y Desarrollo*, septiembre de 2018). Es algo que efectivamente puede ocurrir: recordemos que el concepto de enfermedad holandesa derivó del impacto adverso que tuvo en la economía de Holanda el *boom* de ingresos procedentes de sus exportaciones de gas natural, tras los grandes descubrimientos del Mar del Norte en la década de 1960. En lugar de que estos ingresos impulsaran el crecimiento económico de

Holanda, propiciaron su estancamiento —especialmente en las manufacturas—, debido a la apreciación real de su moneda nacional (el florín) causada por el torrente de divisas. Después de que Corden y Neary publicaron en 1982 su clásico estudio sobre este fenómeno, el concepto de “enfermedad holandesa” ha sido aplicado al análisis de efectos adversos similares en otras economías. En esencia, el mal holandés puede resumirse así: una enorme oferta de divisas, cualquiera que sea su origen puede provocar —en ausencia de una política cambiaria activa que los contrarreste— procesos de apreciación real del tipo de cambio, es decir, una situación de mercado de divisas sobreofrecido cuya característica es que a un precio real progresivamente menor la oferta de divisas se equilibra con la demanda. El efecto inmediato de esta apreciación real de la moneda nacional es el desalineamiento de los precios relativos internos frente a los externos o, lo que es lo mismo, la pérdida progresiva de competitividad-precio de los productos nacionales tanto en el mercado interno (frente a las importaciones) como en los mercados externos, con el consiguiente efecto negativo sobre el crecimiento del producto nacional y del empleo.

Ahora bien: ¿son capaces las remesas de provocar una enfermedad holandesa en México? Por lo menos han sido parte del problema: durante los seis sexenios de experimentación neoliberal, la sobrevaluación del peso mexicano ha sido un mal casi crónico, y las remesas han contribuido a ese mal. Los ingresos por remesas familiares ascendieron a 461 128.5 millones de dólares durante el periodo 1983-2018; y la presión que estos ingresos de divisas ejercieron sobre la apreciación real del tipo de cambio, sobre todo en lo que va del siglo XXI, puede inferirse de su contribución a la cuenta corriente: los ingresos por remesas familiares pasaron del 1.13% del PIB en 2000, al 2.5% del PIB en 2007 y al 2.7% del PIB en 2018. (A esta presión, se agregaron los ingresos de divisas procedentes de las exportaciones petroleras netas de importaciones petroleras, que alcanzaron los 431 572.1 millones de dólares durante el periodo 1983-2018, representando el 2.4% del PIB).

Cabe remarcar, sin embargo, que la enfermedad holandesa sólo se produce en ausencia de una política cambiaria activa capaz de evitar que los enormes flujos de divisas sobrevalúen la moneda nacional. Esta política consiste en esterilizar los efectos indeseados de los flujos de divisas: el banco central interviene en el mercado cambiario comprando las divisas excedentes con moneda nacional; y, al mismo tiempo, evita los efectos inflacionarios de estas compras mediante la colocación de títulos de deuda pública. Pero en México esta medicina no se ha aplicado consistentemente, porque resultaría incompatible con la ortodoxia macroeconómica que utiliza el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, en vez de utilizarla como instrumento de equilibrio de la balanza de cuenta corriente y de competitividad-precio de los

productos nacionales, de modo que apoye el crecimiento acelerado y sostenido del producto nacional y del empleo. Así que no hay que culpar tanto a las remesas (ni a los ingresos petroleros) del mal desempeño de la economía mexicana por efecto de la enfermedad holandesa, porque ésta ha sido tolerada y, además, ha ido acompañada de los demás componentes de política económica de la estrategia neoliberal.

Algo similar ocurre con el mayor efecto negativo directo de la exportación de trabajadores sobre el crecimiento económico de México: la dilapidación de nuestro bono demográfico. Recuérdese que la esperanza de que México logre un crecimiento económico superior al 7% anual tiene entre sus fundamentos la existencia de una estructura demográfica en la cual los trabajadores en activo pueden alcanzar su más alta proporción respecto a la población económicamente dependiente, de manera que pueden lograrse mayores tasas de ahorro interno, inversión y crecimiento económico. Es el llamado “bono demográfico”, que en México se extiende hasta la tercera década del siglo veintiuno; y que los exitosos países asiáticos como China, gracias a sus audaces estrategias endógenas de desarrollo e inserción eficiente en la economía global, han aprovechado para conseguir el acelerado crecimiento de sus economías.

Por el contrario, la estrategia económica aplicada en México desde 1983 hasta el presente, ha resultado un fracaso para generar suficientes empleos remunerados para las nuevas generaciones, de manera que en vez de aprovechar nuestro “bono demográfico”, lo estamos dilapidando, transfiriéndolo en gran parte a Estados Unidos. Esto se manifiesta incluso en la exportación de trabajadores calificados y altamente calificados, tan necesarios para el desarrollo económico nacional. De acuerdo con las cifras de Selene Gaspar Olvera en este libro, los inmigrantes con estudios superiores nacidos en México residentes en Estados Unidos pasaron de 155 852 en 1990 a 1 006 807 en 2015; de ellos, los inmigrantes con estudios de posgrado pasaron de 43 117 en 1990 a 171 600 en 2015; los inmigrantes con licenciatura pasaron de 71 405 a 514 491 en 2015; y los inmigrantes con “grado asociado a licenciatura” pasaron de 41 330 en 1990 a 320 716 en 2015.

Una evaluación de los costos que para México implica la exportación de trabajadores con estudios superiores —o con otros niveles de escolaridad— se presenta en el capítulo de Delgado Wise y Gaspar Olvera en este volumen. Tomando en cuenta el nivel de escolaridad con el que los migrantes mexicanos llegaron a Estados Unidos, los autores estiman que “el costo educativo implícito en la fuerza de trabajo” exportada por México a Estados Unidos ascendió a 83 mil millones de dólares entre 1994 y 2008. “Si los niveles de escolaridad que los migrantes mexicanos llevaron consigo a Estados Unidos se hubieran alcanzado en las escuelas públicas de Estados

Unidos, el costo educativo habría sido de \$613 mmd, a precios constantes de 2008, en el mismo periodo. Las remesas canalizadas a México, que suelen ser consideradas una pérdida de recursos para Estados Unidos, habrían alcanzado apenas 30% del recurso educativo transferido a Estados Unidos por la fuerza de trabajo migrante de origen mexicano”.

Además, Delgado Wise y Gaspar Olvera calculan también el costo implícito de la “transferencia de recursos invertidos en la reproducción social” de los trabajadores mexicanos emigrados a Estados Unidos, es decir el costo de “la formación de las personas antes de emigrar. Estos costos incluyen una diversidad de rubros, como el bienestar público, programas sociales y gastos familiares [...] que constituyen la base socioeconómica para la formación de capital humano”. Su resultado es que, por estos conceptos, México transfirió \$257 mil millones de dólares (a precios de 2008) a Estados Unidos durante el periodo 1994-2008. “La sumatoria de los costos sociales y educativos [...] arroja un total de \$340 mil millones de dólares, lo que implica 1.8 veces la cantidad de todas las remesas enviadas a México entre 1994 y 2008”. Por consiguiente, afirman los autores, “la sociedad mexicana subsidia a la economía estadounidense a través de la migración laboral”.

Causas iguales producen efectos iguales: mientras continúe aplicándose en México la estrategia neoliberal, la economía nacional será incapaz de generar suficientes empleos remunerados para nuestros jóvenes, de modo que continuará la propensión de millones de ellos a emigrar, y nuestro país continuará subsidiando a la economía estadounidense y transfiriéndole buena parte de nuestro “bono demográfico”.

Los primeros mexicanos en Estados Unidos se encontraron de ese lado de la frontera como resultado de la anexión de más de la mitad del territorio mexicano tras la guerra imperialista y la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. “Los mexicanos que ahí se quedaron después de 1848 —relata Manuel García y Griego en su capítulo de este volumen— seguramente desconocían la noción moderna de minoría étnico-racial, pero pronto aprenderían que con la conquista del territorio se habían sumido a un estatus de casta inferior”. En 1850, la población de origen mexicano en Estados Unidos fue estimada en 81 508 personas.

Después de la anexión, siguiendo el relato de García y Griego, vino una etapa de escasa migración, de manera que en 1880 la población de origen mexicano fue estimada en 290 642 personas, en su mayoría descendientes de quienes se quedaron de aquel lado de la nueva frontera. En 1900 —de acuerdo con las cifras de Rodolfo Corona (*Estimación de la población de origen mexicano en Estados Unidos*, COLEF, México, 1992)— la población de origen mexicano en Estados Unidos fue de 463 mil personas, de las cuales 360 mil eran nacidas en Estados Unidos y 103 mil eran inmigrantes.

De hecho, hacia finales del siglo XIX —siguiendo el relato de Jorge Durand— se había iniciado una oleada de inmigración de mexicanos a Estados Unidos, que se prolongó hasta 1920, bajo la forma de “enganche”, es decir un sistema de trabajo semiforzado basado en el endeudamiento del trabajador desde que salía de su comunidad de origen, deuda que crecía con los costos del viaje, alimentación y alojamiento, y que el “enganchado” debía pagar con trabajo. Además, la emigración a Estados Unidos se vio impulsada por el estallido de la Revolución mexicana y la prolongada inestabilidad política y económica subsecuente. En 1930, de acuerdo con cifras de Corona, la población de origen mexicano en Estados Unidos fue de 1 729 000 personas, de las cuales 640 mil eran inmigrantes y 1 089 000 eran nacidos en Estados Unidos. Con la Gran Depresión y las deportaciones que le siguieron, el número de inmigrantes mexicanos disminuyó a 377 mil en 1940, pero aumentó la población de ascendencia mexicana nacida en Estados Unidos a 1 527 000 personas, sumando 1 904 000 personas de origen mexicano residentes en Estados Unidos.

La siguiente oleada de migración comenzó en 1942 con el Programa Bracero, que estuvo vigente hasta 1964. El programa había surgido de la necesidad de trabajadores en Estados Unidos para llenar el vacío de mano de obra dejado por el envío de tropas a la Segunda Guerra Mundial. Los braceros, siguiendo la narrativa de Armando Vázquez y Carolina Aguilar en su capítulo de este libro, eran en su mayoría trabajadores agrícolas que iban y venían por contrato, aunque algunos trabajaron en la construcción de vías férreas. “La generación de los braceros es la raíz familiar de muchos empresarios, políticos y líderes chicanos, porque sus padres, tíos y abuelos fueron braceros”.

Cuando el Programa Bracero llegó a su fin en 1964, nos cuentan Vázquez y Aguilar, “muchos migrantes de México siguieron en la lógica de ir y venir, a pesar de no contar con contratos de trabajo; y otros decidieron quedarse en Estados Unidos, algunos formando familias y otros buscaron que sus esposas e hijos fueran emigrando para reunificarse del otro lado”. Comenzó entonces una siguiente oleada de emigración de mexicanos a Estados Unidos que, de acuerdo con Jorge Durand, va de 1965 a 1985. “Se caracteriza —escribe Durand en su capítulo de este volumen— por una frontera porosa y la incorporación de la mujer y migrantes urbanos al flujo y al mercado del trabajo migrante. No se trata de una política específica definida legalmente, sino de mantener un *status quo* que permitiera el abastecimiento de mano de obra sin las trabas burocráticas del Programa Bracero. En esta fase se toleró el cruce subrepticio de la frontera, al mismo tiempo que se pusieron en marchas mecanismos de deportación para equilibrar la relación entre oferta y demanda”.

Fue precisamente en esta época de elevada demanda de mano de obra en Estados Unidos cuando, a fines de los años setenta, por primera vez se planteó la integración económica de América del Norte en un Mercado Común. El destacado economista mexicano José Luis Ceceña —aduciendo especialmente el extenso artículo “Why a North American Common Market Won’t Work-Yet”, publicado en la revista estadounidense *Fortune*, 10/IX/79— examinó los alcances de dicha iniciativa, que “cada vez con más insistencia se está(ba) planteando en diversos círculos de Estados Unidos”. “La formación del Mercado Común de América del Norte, escribió Ceceña, consistiría en la integración de las economías de los tres países, de tal manera que hubiera libertad de flujos comerciales, de capital y de trabajadores”. “La finalidad declarada que persiguen sus promotores norteamericanos [...] consiste en lograr la autosuficiencia de energéticos”; y, de manera específica, “a las grandes empresas norteamericanas” les interesa “ampliar su mercado, abrir nuevas oportunidades de inversión para sus capitales y disponer de más abundante mano de obra barata” (José Luis Ceceña, “Relaciones México-Estados Unidos: Mercado Común de América del Norte”, en *Problemas del Desarrollo*, Num. 49, IIEc-UNAM, México, 1980). Como es sabido, la iniciativa —que era respaldada por quien pronto se convertiría en presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan— no prosperó entonces, pero el proyecto de integración económica —tal como lo pronosticó Ceceña— volvió a plantearse después (en 1989), pero ya no bajo la forma de un Mercado Común al estilo europeo, sino bajo la forma de un Tratado de Libre Comercio con libre flujo de mercancías y capitales, pero sin libre flujo de mano de obra. Obviamente, la historia viene a cuento porque en una época de elevada demanda de mano de obra en Estados Unidos —y de “fronteras porosas” para decirlo con Durand— no era mal vista la posibilidad de un libre flujo de trabajadores.

Es relevante observar, además, que la emigración de mexicanos a Estados Unidos, atraídos por los altos salarios en la mayor economía del planeta, se vio también alentada por la creciente masa de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, que fue tejiendo un sistema de redes familiares y sociales que favorecieron —sumadas, desde luego, a la “frontera porosa” y a la elevada demanda de mano de obra por la mayor economía del planeta— la posterior emigración de más mexicanos. En 1970, de acuerdo con las cifras de Corona, había 5 422 000 personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales 788 mil eran inmigrantes y 4 634 000 eran estadounidenses por nacimiento. Diez años después, en 1980, había 9 071 000 personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales 6 872 000 eran nativas y 2 199 000 eran inmigrantes.

En estas circunstancias arribó al gobierno de México la tecnocracia neoliberal, con Miguel de la Madrid como presidente, cuya estrategia económica trajo consigo el pobre crecimiento del PIB y del empleo remunerado arriba descritos, desencadenando una tremenda fuerza expulsora de población de trabajadora hacia el extranjero en busca de los empleos que no se creaban en nuestro país. De acuerdo con las cifras de CONAPO basadas en datos de U.S. Census Bureau, el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos pasó de 2 199 000 en 1980 a 4 447 000 en 1990, a 8 072 288 en 2000 y a 11 811 732 en 2007 (CONAPO, *Observatorio de Migración Internacional, Cuadro III.5.1 Población de origen mexicano residente en Estados Unidos. 1900-2010*; y CONAPO, *Cuadro 1.1 Población nacida en México residente en Estados Unidos por año de captación*; disponibles en <http://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/Resource/1214/6/images/Mexicanos_en_EU.xlsx>, consultados el 29 de marzo de 2019).

Desde luego, para hacer realidad esta impresionante migración de mexicanos hacia Estados Unidos tuvieron que alinearse los astros también en el lado norte de la frontera, dando lugar a una nueva oleada de migración que comienza en 1986 y termina en 2007. Su punto de partida, de acuerdo con Durand, fue el “proceso de amnistía, regularización y control fronterizo propugnado por la ley *Immigration Reform and Control Act* (IRCA) [aprobada precisamente en 1986]. A este periodo, que también abarca dos décadas, lo hemos llamado la fase bipolar. Inició con la amnistía y legalización de 2.3 millones de trabajadores indocumentados, le sigue la persecución legal de los migrantes indocumentados con la Proposición 187 en California en 1994, la ley federal de 1996 contra la migración “ilegal” (IIRAIRA), la ley Patriota después del 11 de septiembre y la propuesta de reforma migratoria de 2005, que culminó con una gran reacción popular y las mega marchas de 2006”. Fueron estas grandes manifestaciones de 2006 —como se documenta ampliamente en este volumen— un punto culminante de las luchas sociales de los inmigrantes en Estados Unidos, montados en la larga oleada de demanda de mano de obra migrante que se extendió hasta 2007. Esta oleada llegó a su fin con la crisis financiera que estalló en 2008 y desembocó en la Gran recesión, configurando la mayor crisis económica en Estados Unidos desde la Gran Depresión, con efectos que se extendieron durante más de un lustro.

Como expresión de la megacrisis económica, la tasa de desempleo abierto en Estados Unidos se elevó del 4.6% de la PEA en 2007, al 5.8% en 2008, al 9.3% en 2009, y al 9.6% en 2010, trayendo consigo la puesta en marcha del mecanismo de deportaciones de inmigrantes indocumentados, habitual durante las crisis de Estados Unidos desde tiempos de la Gran Depresión. Paradójicamente, quien había hecho su campaña presidencial con un dis-

curso migratorio progresista, fue el encargado de hacer el trabajo sucio: “el gobierno de Obama —señala Paris Pombo en su capítulo de este volumen— llevó a cabo 2 878 672 remociones de migrantes que residían en ese país. De acuerdo a datos oficiales, cerca de 70% de esos deportados son mexicanos”. Aunque el número de deportaciones puede no ser idéntico al número de personas, porque muchos recién llegados son deportados dos o más veces en sendos intentos, el objetivo se cumplió: parar en seco la inmigración. En 2014 sólo había 11 667 956 inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, cifra ligeramente inferior que la de 2007.

No está de más recordar, por la argumentación posterior, que el gobierno de Calderón llegó a vanagloriarse por la “emigración cero”, como si fuera una señal de generación de suficientes empleos remunerados en México. En realidad, la “emigración cero” fue producto del ancestral mecanismo migratorio estadounidense que dosifica el flujo externo de mano de obra: “frontera porosa” cuando requieren mano de obra inmigrante, deportaciones masivas cuando no la necesitan.

En consecuencia, los años de nula migración neta se extendieron porque la recuperación de la economía estadounidense fue muy lenta: la tasa de desempleo fue 8.9% en 2011, de 8.1% en 2012, de 7.4% en 2013, de 6.6% en 2014 y sólo volvió a su nivel normal en 2015, con 5.3%. Precisamente a partir de este año (2015), el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos comenzó a aumentar paulatinamente, alcanzando la cifra de 12 263 311 personas en 2018 (CONAPO, *Observatorio de Migración Internacional, Series y geografía migratoria, 2. Mexicanos en Estados Unidos, Tablas*, disponible en <http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Series_y_geografia_migratoria>).

Mientras tanto, la población de origen mexicano nacida en Estados Unidos continuó creciendo de manera sostenida. Después de haber pasado de 6 872 000 personas en 1980, a 9 697 000 en 1990, aumentó a 14 428 000 personas en 2000, y a 21 210 000 en 2010, de acuerdo con las estimaciones de CONAPO (CONAPO, *Observatorio de migración internacional*, disponible en <www.omi.gob.mx/work/models/CONAPO/.../2011/origenmex/1115/03_05_01.xlsx>). En 2016, de acuerdo con las estimaciones de Selene Gaspar en este volumen, la población nativa de origen mexicano residente en Estados Unidos ascendió a 24 801 000 personas.

Sumando inmigrantes y nativos, la población de origen mexicano en Estados Unidos pasó de 9 071 000 personas en 1980, a 14 094 000 en 1990, a 22 500 000 en 2000 y a 33 083 000 en 2010 de acuerdo con las estimaciones de CONAPO; y a 36 804 000 personas en 2016, de acuerdo con las estimaciones de Selene Gaspar.

En paralelo a este impresionante crecimiento, los mexicanos se diseminaron a lo largo y ancho del territorio estadounidense. “Antes de 1980 —relata García y Griego— era inusitado encontrar mexicanos fuera de los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, más algunas regiones del medio este como Chicago. A partir de ese año se extendió esta población, sobre todo hacia el noroeste del país y a algunas ciudades del medio oeste”. Correlativamente, “creció vertiginosamente el número de radiodifusoras y medios de comunicación en español a lo largo y ancho del país. Sólo un puñado de estados no contaban con radiodifusoras de habla hispana a partir de 1990”.

Asimismo, se produjo una notable diversificación ocupacional de los inmigrantes mexicanos, dejando atrás la imagen del mexicano ocupado en la agricultura y en la construcción. De acuerdo con las cifras de CONAPO, basadas en el U.S. Census Bureau, en 2018 sólo el 5.2% de los inmigrantes mexicanos se ocupaban en el sector primario; el 34.9% en el secundario; y el 60% en el terciario. Por tipos de ocupación, el 25.6% fueron obreros, transportistas y trabajadores especializados de la construcción; el 10.6% fueron ejecutivos, profesionistas y técnicos; el 12.3% estaban ocupados en ventas y ocupaciones de oficina; el 23% fueron trabajadores de servicios, etcétera, de manera que se encontraron en todos los agregados ocupacionales de la economía.

Por ramas de actividad, y considerando también a los trabajadores de origen mexicano nacidos en Estados Unidos, de acuerdo con las cifras de Delgado Wise y Gaspar Olvera, basadas en el U.S. Bureau of Labor Statistics, en 2016 el 12.9% de los trabajadores inmigrantes mexicanos (y el 8.3% de los trabajadores nativos de origen mexicano: TNOM) se ocupaban en la manufactura; el 17.7% de los inmigrantes mexicanos (y el 7% de los TNOM) se ocupaban en la construcción; el 10.4% de los inmigrantes mexicanos (y el 16.2% de los TNOM) trabajaban en el comercio al mayoreo y menudeo; el 13% de los inmigrantes mexicanos (y el 10.2% de los TNOM) trabajaban en servicios profesionales y empresariales; el 2.7% de los inmigrantes mexicanos (y el 5.9% de los TNOM) trabajaban en actividades financieras, etcétera. En suma los inmigrantes mexicanos y los trabajadores de origen mexicano nacidos en Estados Unidos se ocupaban en las más diversas ramas de actividad.

La contribución de los inmigrantes mexicanos y los trabajadores nativos de origen mexicano a la generación de riqueza en Estados Unidos, ha crecido de manera proporcional a su participación en la fuerza laboral. De acuerdo con las cifras de Delgado Wise y Gaspar Olvera, en 2016 los trabajadores inmigrantes mexicanos (8 197 000 personas) representaron el 5.4% de la población ocupada en Estados Unidos (150 762 000 personas), y los

trabajadores de origen mexicano nacidos en Estados Unidos (7 415 000 personas) representaban el 4.9% de la población ocupada. Los autores calculan que en 2016, la contribución de los inmigrantes mexicanos a la generación del PIB estadounidense ascendió a 819 mil millones de dólares (a precios de 2009), el 4.9% del PIB de ese país (16 662 000 millones de dólares a precios de 2009); y la contribución de los trabajadores de origen mexicano nacidos en Estados Unidos ascendió a 906 mil millones de dólares, el 5.4% del PIB estadounidense. En suma: la contribución de los inmigrantes mexicanos y de los nativos de origen mexicano al PIB de Estados Unidos alcanzó los 1 725 000 millones de dólares en 2016 (a precios de 2009), el 10.4% del PIB estadounidense. Para comparar, en 2016 el PIB de México fue de 1 238 000 millones de dólares a precios de 2009.

En el ámbito de los derechos civiles, los movimientos reivindicativos de la población de origen mexicano en Estados Unidos conforman una larga historia. Como relata García y Griego: “la llegada de estadounidenses en los territorios conquistados desató un conjunto de acciones que marcó a los mexicanos, sus descendientes y a los inmigrantes mexicanos como una casta inferior colonizada que solamente en teoría gozaba de derechos de ciudadanía”. Sin embargo, como relatan Vázquez y Aguilar en su capítulo de este libro, “a partir de diferentes estrategias y litigios sobre escuelas libres de segregación y el derecho al voto, las comunidades de minorías étnicas fueron logrando hacer frente a las opresiones estructurales”, aunque fue hasta la década de 1960 cuando los movimientos en favor de los derechos civiles de la población de origen mexicano adquirieron mayor visibilidad. “Durante la década de 1960 ocurrieron movimientos sociales por la liberación de pueblos oprimidos en todo el mundo, y Estados Unidos no fue la excepción”. Destacó especialmente el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, que influyó fuertemente en la organización política de los mexicoestadounidenses. Poco después del histórico discurso de Martin Luther King, “Yo tengo un sueño”, pronunciado en la escalinata del monumento a Abraham Lincoln en Washington, César Chávez comenzó en California —siguiendo el relato de Vázquez y Aguilar— el esfuerzo de organización del Sindicato de Trabajadores del Campo para “hacer valer los derechos de los trabajadores agrícolas migrantes, que eran en su mayoría nacidos en Estados Unidos”. Esta experiencia impulsó “la organización política de los mexicoestadounidenses y sirvió como fuente de inspiración para impulsar el movimiento chicano”. Siguió la rebelión de 1966 encabezada por Reies López Tijerina en el estado de Nuevo México, para recuperar tierras que legalmente pertenecían a mexicoestadounidenses de acuerdo con sus títulos de la Nueva España y los tratados de Guadalupe Hidalgo. A esta rebelión siguió el movimiento chicano encabezado por Rodolfo “Corky” Gonzales, enfocado

hacia “la identidad mexicoestadounidense y la necesidad de organizarse para dejar de ser discriminados”. A partir de estos episodios seminales, comienza la larga historia de los movimientos y las organizaciones en favor de los derechos civiles de la población de origen mexicano en Estados Unidos, cuya conmovedora y alentadora riqueza de expresiones es ampliamente tratada en este volumen (en los capítulos de García y Griego, Durand, Vázquez y Aguilar, Villegas y Santamaría, Chávez, Ojeda y otros coautores). Baste concluir, con García y Griego, que “en la actualidad, en la segunda década del siglo XXI, la comunidad mexicoestadounidense al igual que la de los inmigrantes, tiene recursos que no tenía hace cincuenta años, aun cuando esté luchando mediante sucesivas batallas contra la discriminación y en favor del proceso de integración”.

El respeto irrestricto de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, que legítimamente reclamamos desde México, debemos hacerlo extensivo indefectiblemente a los migrantes extranjeros que radican en México o transitan por nuestro territorio, adoptando el enfoque de seguridad humana establecido en las convenciones internacionales y dejando definitivamente atrás el enfoque policiaco de seguridad nacional.

Recordemos que las nefastas políticas migratorias con enfoque de seguridad nacional, es decir, de fuertes restricciones al ingreso, estancia y tránsito de migrantes, endurecimiento de la vigilancia fronteriza y hasta criminalización de los migrantes, indebidamente aplicadas en México, derivaron de la actitud servilmente colaboracionista de los gobiernos neoliberales de México con los gobiernos de Estados Unidos. Como señalan puntualmente Villafuerte y García Aguilar en su capítulo de este volumen: los programas de contención migratoria inducidos por el gobierno de Estados Unidos, comenzando con Plan Sur y Sellamiento de la Frontera Sur durante el gobierno de Fox; Reordenamiento de la Frontera Sur e Iniciativa Mérida bajo el gobierno de Calderón; y Programa Frontera Sur, con el gobierno de Peña Nieto, “van dirigidos al resguardo de los intereses de Estados Unidos”, porque México no es país de destino de la migración centroamericana, sino país de tránsito de migrantes que se dirigen a Estados Unidos, además de ser, principalmente, país de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Los efectos de esta política migratoria sobre los derechos humanos de los migrantes y sus defensores son ampliamente analizados en la tercera parte de este volumen (por Anguiano Téllez, Paris Pombo, Chávez y Lemus, Cabrera-Correa, Casillas y otros coautores). Como señala Anguiano Téllez, “la violencia se ha propagado por territorio mexicano en la mismas rutas que siguen los migrantes en tránsito por el país y que les ha convertido en víctimas del crimen organizado con inusitada crueldad durante los últimos

años”. Y Correa-Cabrera, citando a Benítez Manaut, puntualiza: “Los migrantes son víctimas de las organizaciones criminales ya que se ven orillados a utilizar sus servicios, debido a las dificultades derivadas del mayor control de la frontera sur de México, de las rutas de migración y de la frontera sur de Estados Unidos”. Además, agrega Correa-Cabrera, los migrantes sufren abusos de parte de “autoridades municipales, estatales y federales”, que “son principalmente el robo y la extorsión. A los maras se han sumado pandillas compuestas principalmente por mexicanos, que aprovechan la situación de indefensión de los migrantes para asaltarlos y abusar de ellos”. En este contexto, señalan Chávez y Lemus, “ante las continuas denuncias de las agresiones que sufrían y sufren los migrantes en su paso por México y la ausencia de una respuesta estatal de velar por la seguridad de ellos, se han establecido centros de apoyo (casas y/o albergues) a cargo de diversas organizaciones de la sociedad civil que defienden y apoyan a los migrantes en tránsito”.

Es apremiante poner fin a las nefastas políticas migratorias con enfoque de seguridad nacional, y pasar a una política migratoria centrada en los derechos humanos. El gobierno de López Obrador pareció haber dado pasos significativos en esta dirección, otorgando “tarjetas de visitantes por razones humanitarias” a migrantes centroamericanos, y protegiendo caravanas organizadas por migrantes para su propia seguridad y su tránsito ordenado hacia Estados Unidos. Pero estas acciones han resultado, primero, insuficientes (de hecho, la mayoría de los migrantes en tránsito continúan pasando de manera clandestina en grupos más pequeños: *Reforma*, 5/IV/2019), y, después, erráticas o cambiantes. Como señaló Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración: “Un día son visas humanitarias, luego revisiones migratorias, luego detenciones y deportaciones. Entonces [...] la política de día a día no es clara”: *Reforma*, 24/IV/2019). Paradójicamente, esto ocurrió después de que el presidente López Obrador enunciara una visión migratoria centrada en los derechos humanos: “están pasando —dijo— hermanos centroamericanos a aquel país [Estados Unidos], vía territorio mexicano, porque en Centroamérica no hay alternativas y la gente se echa a andar a buscarse la vida”; están ejerciendo “el derecho a vivir libres de miseria, por eso no se puede condenar la migración” (*La Jornada*, 30/III/2019). En convergencia con esta postura, organizaciones de la sociedad civil, como Sin Fronteras, dirigida por Ana Saiz, han exigido que la política migratoria de respeto irrestricto de los derechos humanos “se vuelva en verdad una política de Estado” (*La Jornada*, 31/III/2019).

Desde luego, la otra parte nodal de la solución consiste en atender las causas económicas y sociales internas (nacionales y regionales) que originan la migración hacia Estados Unidos, ampliamente analizadas en este libro.

En su capítulo, Chávez y Lemus señalan: “El cruce de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades por la frontera sur de México continuará, porque prevalece la crisis económica, social y política en sus países de origen. Siempre tendrán la esperanza de que en países con un nivel más elevado de desarrollo encontrarán mayores opciones de trabajo y una mejor calidad de vida”. Más aún, frente al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el recrudecimiento de la violencia y la pobreza en Centroamérica, señalan Chávez y Lemus, es probable que “un creciente número de migrantes intentarán encontrar alguna opción de trabajo en México”.

En esta perspectiva, destaca la postura humanitaria de solidaridad y hospitalidad planteada por López Obrador, al afirmar que “México otorgaría visas laborales en el sureste del país a centroamericanos, confiando en que habrá posibilidades de generar empleos. Tanto por la construcción del Tren Maya y las obras en el Istmo de Tehuantepec, como por el programa de siembra de árboles frutales y maderables, que producirán espacios laborales que atemperarán las corrientes migratorias hacia Estados Unidos” (*La Jornada*, 29/III/2019). Sin embargo, aunque la intención es buena, no hay que hacerse ilusiones de que México pueda generar —sin un cambio fundamental de su estrategia económica— suficientes empleos remunerados para los jóvenes mexicanos, y también para migrantes centroamericanos.

Además, hay algo que debe observarse: existe una quizá nada extraña coincidencia entre el paro en seco de la migración de mexicanos a Estados Unidos (eufóricamente llamado por el gobierno de Calderón “migración cero”) y el mayor crecimiento de la delincuencia y la violencia en México. Basten dos indicadores: el número de homicidios dolosos en México pasó de 10 253 en 2007, a 20 143 en 2010 y a 30 499 en 2018 (*Sistema Nacional de Seguridad Pública*, disponible en <<http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf>>); y el número de tomas clandestinas de huachicol pasó de 462 en 2009, a 1 449 en 2012, a 3 674 en 2014, a 12 581 en 2018 (*Reforma*, 18/II/2013 para 2006-2012; para 2014 *La Jornada*, 9/II/2016; para 2018, PEMEX, *Reporte de tomas clandestinas*). Ergo, la espiral de violencia y delincuencia en México podría estar, por lo menos en parte, causalmente asociada al cierre de la válvula de escape que representaba la migración de trabajadores a Estados Unidos no compensada por una mayor generación de empleos remunerados en México.

Para poner fin a las causas económicas y sociales internas de la emigración de mexicanos, que son al mismo tiempo, sin duda alguna, causas socioeconómicas de la proliferación de la violencia y la delincuencia (véase el volumen *De la inseguridad pública a la Gran seguridad*, de esta colección), es necesario poner fin a la estrategia neoliberal que ha provocado el lento

crecimiento de la economía mexicana y la insuficiente generación de empleos. Durante el sexenio 2019-2024, cada año necesitamos crear 1.4 millones de nuevos empleos remunerados para dar ocupación digna a los jóvenes que demandarán puestos de trabajo. Para lograrlo, la economía mexicana debe crecer a una tasa cercana al 6% anual, más del doble que la observada durante el periodo de aplicación de la estrategia económica neoliberal (2.3% anual). Por ello, es necesario poner fin a la estrategia neoliberal y transitar a una nueva estrategia de desarrollo capaz de superar el pobre y errático crecimiento de la economía mexicana, generar suficientes empleos dignos para las nuevas generaciones, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un ciclo largo de desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático. Los principios e instrumentos fundamentales de esta estrategia posneoliberal de desarrollo son ampliamente definidos y rigurosamente argumentados en esta colección de volúmenes.

Finalmente, en el ámbito de las relaciones con los países vecinos, además de promover la cooperación regional entre Estados Unidos, México y Centroamérica para enfrentar las problemáticas fronterizas en materia de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas y otros delitos transnacionales, como señala Correa-Cabrera en su capítulo de este volumen, “es esencial plantear soluciones de más largo plazo que tengan que ver con el desarrollo regional, el crecimiento del empleo y la reducción de los altos niveles de pobreza, y sobre todo de desigualdad que llevan a algunas personas a desplazarse de sus países a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida”. Por el contrario, continuar el esquema migratorio con enfoque de seguridad nacional, “no favorecerá mayores niveles de desarrollo ni estabilidad en nuestro continente, y las dos fronteras de México continuarán siendo espacios de contención y violencia. Es preciso entonces revertir estas tendencias y ampliar la cooperación para promover la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones”.

